

Desapareció ya "el Estado Benefactor"

Pronasol, la Última Trinchera

- ★ Muchos Recursos son Para Sostener a la Burocracia
- ★ Una de las Grandes Ausencias, la Solidaridad Social
- ★ Dan en el Gobierno más Importancia a la Eficiencia

LORENZO MEYER

El partido hoy en el poder sigue siendo, básicamente, el mismo de hace 60 años, pero su fidelidad a sí mismo no es absoluta y total. A falta de otros cambios más interesantes y significativos, ha decidido modernizar partes de su discurso. En efecto, este discurso es tan nuevo en boca de los priístas, que algunos de sus conceptos clave, como son los de modernidad y solidaridad, aún no han sido cabalmente definidos, y por lo tanto la sociedad todavía no entiende exactamente qué es lo que el grupo en el poder se propone hacer en el mundo real. Y el asunto va más allá de la semántica, pues resulta que sin una definición adecuada, se puede llegar a concluir que, por ejemplo, solidaridad y modernidad implican políticas tan contradictorias que quizá resulten incompatibles.

Desde el momento mismo en que Carlos Salinas aceptó su precandidatura presidencial, el término modernidad ocupó un lugar muy destacado en el discurso oficial. Todavía sigue ahí, aunque hoy debe compartir las luces de los reflectores con otro término que apareció un poco después: el de solidaridad. Esta mancuerna conceptual suena y se ve bien, pero es posit

PRONASOL, LA ULTIMA

Sigue de la primera plana

que su traslado del plano del discurso al de la realidad presente problemas.

Moderno es un término que proviene del latín y significa "lo que existe desde hace poco tiempo, que ha sucedido recientemente". Bueno, lo reciente e importante en nuestro proceso político, es la decisión de cambiar el modelo económico. Se trata de saltar de una forma de capitalismo en donde el Estado era, a la vez organizador, supervisor y productor de bienes y servicios, a otra en donde la empresa privada deberá ser la gran organizadora del mercado y el Estado deberá contentarse con retener el papel de supervisor. Aquí conviene hacer un señalamiento: el término para el papel del Estado gustan usar hoy las gentes del gobierno no es el de supervisor sino el de rector, pero aún está por verse si las principales fuerzas del mercado, que cada

vez son de carácter internacional, le dejan al gobierno mexicano —a ese gobierno montado en un aparato estatal "adelgazado"— la capacidad de dirigir, es decir, de marcar el rumbo hacia donde debe ir la economía mexicana. Dadas las dimensiones de las economías con las que hoy se busca de manera casi monomaniática la integración comercial —la estadounidense y la canadiense—, hay motivos suficientes para dudar que el nuevo Estado mexicano del futuro pueda dirigir la economía y no simplemente adaptarse al rumbo que le marquen las fuerzas externas.

★

Pero volvamos al tema central, si modernizar es exponer a la economía mexicana a las fuerzas del mercado internacional —comercio exterior con mínimas barreras arancelarias, grandes facilidades a la inversión extranjera directa,

libre flujo de capitales, pago puntual de la enorme deuda externa, etcétera— entonces hay que convenir, que no puede haber modernización exitosa si no se da primacía a la eficiencia en la producción. En cierto sentido, modernización es igual a la maximización de la eficiencia en la asignación de recursos escasos. Y la medida de esta eficiencia, en última instancia, no es otra que la capacidad de los productos hechos en México —sean por empresas nacionales o extranjeras— de competir en calidad y precio con otros similares, producidos en cualquier otra parte del orbe.

La eficacia medida en términos de competitividad es lo único que puede sacar adelante el proyecto económico neoliberal cuyos cimientos fueron echados el sexenio pasado y cuyos muros y techo están siendo construidos a toda prisa en

el actual. Desafortunadamente, la eficacia económica impone condiciones muy duras, brutales, a los productores. El exportador exitoso requiere premiar con altas ganancias a sus accionistas y con altos sueldos a los dirigentes y trabajadores que se muestren agresivos y capaces de introducir y usar con éxito las tecnologías adecuadas para satisfacer las demandas de los variados y cambiantes mercados externos. Por esas mismas razones, las exigencias de eficacia requieren ignorar o compensar con sumas ínfimas (tan ínfimas como el salario mínimo, por ejemplo), a todos esos miembros de la fuerza de trabajo que no tienen preparación adecuada porque, entre otras cosas, nunca recibieron una educación a la altura de las necesidades de una modernización que ni siquiera entienden.

¿Cuál es la población mexicana que hoy está impedida de ser parte de la modernización? ¿Son, por decir algo, los 40 millones de mexicanos pobres que la Conferencia de Instituciones Religiosas de México (CIRM) dice que hay? O son únicamente los 16 millones que la misma fuente califica como conciudadanos nuestros que viven en la llamada pobreza absoluta (La Jornada, 30 de junio). Sean los que fueren, no hay duda de que son muchos, y tan o más mexicanos que los "modernos", y no fue por decisión propia su exclusión del nuevo esquema económico el país no los preparó para ello. Desafortunadamente la lógica de la eficacia del capitalismo global no se conduce de los que pierden

no importan sus razones. En esas condiciones, ¿quién va a proteger a los millones de inmodernizables? Es aquí donde brota el otro término del nuevo discurso político: Solidaridad o, para ser más exactos, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que, se supone, es la respuesta neoliberal a la vieja demanda —siempre incumplida— de justicia social.

★

Pero ¿qué significa, realmente, el término solidaridad? Volvamos otra vez a las definiciones básicas. Solidaridad, según nos dice el diccionario (el de Oxford), no es otra cosa que "la cualidad de una comunidad de estar perfectamente unida en intereses, simpatías o aspiraciones", en cualquier caso, esta supuesta unión tiene su origen y da como resultado, la confianza mutua entre sus miembros. La solidaridad del discurso político actual, y que en estos días aparece en cualquier momento y lugar (en la radio, en separatas de los periódicos, en los costados de las pipas de agua, en los programas para cumplir el servicio social universitario, etcétera), pretende referirse a la unidad de los mexicanos en los tres aspectos mencionados: intereses, simpatías y aspiraciones. Desafortunadamente, la realidad nos dice a gritos y en todo momento que esa unidad brilla por su ausencia.

¿Qué unidad de intereses y aspiraciones puede haber entre los ya famosos "300 de Legorreta" y los campesinos de Oaxaca o los habitantes de Chalco, por referirnos un lugar que Pronasol han hecho famoso? ¿En qué medida puede

TRINCHERA

haber, ya no digamos unidad de intereses, sino meras simpatías entre un gran empresario mexicano, de esos que la prensa nos dice que viven la mitad del tiempo fuera del país y que tiene su yate en una "marina" de su propiedad en Nueva York y los habitantes del Pedregal de Héroes de Padierna en la ciudad de México? ¡Ninguna! Sin embargo, lo que la modernización neoliberal propicia es que "los 300" y algunos más vean remunerada su eficiencia —en sus exportaciones o importaciones de programas de televisión, autopartes, vidrio o cemento, en sus operaciones de bolsa, etcétera— con un aumento de la distancia que media entre ellos, los nuevos organizadores del país, y el resto de los mexicanos. Este es el costo social inevitable que el capitalismo ha impuesto desde sus orígenes y que el "Estado benefactor" trató de disminuir, pero ahora ese Estado ha desaparecido, en México y en muchas otras partes, víctima de sus propias ineficiencias y corrupciones.

Lo que la actual política modernizadora busca es, entre otras cosas, eficiencia por la vía de la disminución sustantiva del gasto público, y Pronasol no es más que la última trinchera de una guerra cuyo final ya está decidido, una guerra que perdió en 1982 el Estado benefactor posrevolucionario. Las obras como las inauguradas hace unos meses por el Presidente en Chalco —aprovechadas doblemente: la primera vez para difundir las bondades del programa de solidaridad y la segunda como escenario para la visita papal— son bienveni-

das, dignas de aplauso, pero insuficientes, pues no se pueden repetir a escala nacional ni pueden compensar la pérdida de poder de compra del salario desde 1982 a la fecha. El grueso de los recursos que el Estado capta hoy día se destina no a hacer frente a las carencias de los sectores sociales más débiles sino al mantenimiento del aparato burocrático, los servicios públicos mínimos indispensables y al pago de la deuda externa e interna; así lo requiere la lógica de la modernización, y a ella se subordina la de la solidaridad.

La solidaridad social es una de las grandes ausencias históricas de México. Desde que nuestro país se incorporó en el siglo a los procesos mundiales por la dolorosa vía del colanaje, la sociedad mexicana se dividió profundamente en vencedores y vencidos, en castas y clases, y el resultado fue la sociedad antisolitaria. Esa herencia subsiste y para demostrarlo son suficientes las cifras sobre distribución del ingreso. Según los datos de 1984, 40% de la población mexicana que se encuentra en el fondo de la pirámide social apenas si logró apropiarse de 13% del ingreso disponible; en contraste, 10% de los mexicanos más

afortunados tuvieron a su disposición 35.4% del total de ese ingreso.

La solidaridad, definida como unidad social de intereses, simpatías y aspiraciones, es una meta legítima y particularmente atractiva para los mexicanos. Desafortunadamente, esa meta no es por ahora compatible con la eficiencia en el uso de los recursos que demanda una modernidad que, según los cálculos más recientes, necesita atraer varios miles de millones de dólares anuales en inversión externa o capitales repatriados, y duplicar en dos o tres años el monto de sus exportaciones para hacer frente a sus obligaciones externas y a las necesidades de importación de una época en que los términos de intercambio mundiales se han movido contra economías como la mexicana.

Si los razonamientos expuestos no están equivocados, entonces no queda más remedio que concluir que entre nosotros y por ahora, la voluntad política de la clase dirigente está puesta en la eficiencia económica y que, pese a lo que se dice en el discurso, esa eficiencia que es requisito fundamental para el éxito de la modernización, hace imposible una solidaridad social real.